

## **JUZGADO NOVENO DE FAMILIA**

Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

**Acción de Tutela**

**Radicado 2021-0584.**

### **ASUNTO**

Surtido el trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991 se procede a decidir sobre la acción de tutela instaurada por EIDER ELIECER PINTO RODRIGUEZ contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, en orden a proteger su derecho fundamental de petición, igualdad y mínimo vital.

### **HECHOS**

El petente interpuso derecho de petición en interés particular de forma escrita el día 5 de agosto de 2021, solicitando se realice un nuevo PAARI, con nueva valoración para determinar el estado de las carencias y de vulnerabilidad para conceder la ayuda humanitaria, fecha cierta del pago, que se continúe dando cumplimiento a lo ordenado en auto 092, se corrija la ayuda humanitaria y se expida certificado de desplazado.

### **ACTUACIÓN PROCESAL**

Admitida la presente tutela mediante auto de fecha 6 de septiembre del presente año, se ordenó la notificación a las partes y se solicitó a la accionada informar lo que a bien tuviera respecto de la acción iniciada en su contra.

La entidad accionada LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, fue notificada en debida forma, quien contestó.

## **CONSIDERACIONES**

En la constitución de 1.991 se consagra una serie de mecanismos en favor de los ciudadanos, con el fin de propender por la defensa de los derechos, tanto individuales como colectivos; respecto de los primeros, es la tutela, el mecanismo con el que cuentan todos los ciudadanos, cuando quiera que una conducta de acción u omisión de una autoridad, atente contra esos derechos o los ponga en peligro. Por eso el artículo 86 de la constitución política establece la posibilidad que tienen todas las personas de acudir a un Juez, cuando actitudes de acción o de omisión de una autoridad, vulnere o amenace un derecho individual de los catalogados por la misma Carta, como de carácter fundamental, pero en el entendido que ese mecanismo es procedente siempre y cuando el individuo no cuente con otro medio judicial o administrativo para la defensa de sus derechos.

La acción de tutela protege únicamente los derechos fundamentales constitucionales a falta de mecanismos judiciales, es decir, su utilización no es genérica, sino excepcional.

Problema jurídico:

Determinar si la accionada vulneró el derecho fundamental de petición presentado el día 5 de agosto de 2021.

Normatividad aplicable:

- Constitución Política: Artículo 23 derecho de Petición
- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo art. 14.

Precedentes jurisprudenciales:

Sentencia T-377 de 2000 se delinearon algunos criterios básicos de este derecho:

*“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.*

*b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.*

*c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.*

*d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.*

*e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.*

*(...)*

*g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,*

*la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes...*

*h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.*

*i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994."*

A los anteriores criterios, la Corte Constitucional añadió posteriormente otros dos: primero, ha establecido que la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder; y segundo, ha precisado que ante la presentación de una petición la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.

El accionante presentó derecho de petición el día 5 de agosto de 2021 ante la accionada y solicita se le proteja su derecho fundamental de petición, indicando que la entidad omitió dar respuesta al mismo.

Ahora bien, la accionada en respuesta allegada al plenario, incluye contestación a la petición de EIDER ELIECER PINTO RODRIGUEZ, remitida a la dirección electrónica aportada con la presente acción, donde se le respondió de fondo su petición.

De igual manera, se pudo observar que, frente al derecho de petición ante la accionada, resulta igualmente que se había proferido la resolución No. Resolución No. 0600120202898438 del 08 de octubre de 2020, mediante la cual ordenó el pago de DOS (02) giros por concepto de atención humanitaria de emergencia, por valor de CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$420.000) cada uno, conforme lo anterior, una vez revisados los aplicativos de la UARIV, logra establecerse que la atención solicitada le fue otorgada de la

siguiente manera: • Un PRIMER giro por valor de CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$420.000), colocado el día 09 de septiembre de 2020 y pagado el día 11 de septiembre de 2020 en CUALQUIER PUNTO SURED UBICADO EN BOGOTÁ D.C. • Un SEGUNDO giro por valor de CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$420.000), colocado el día 13 de mayo de 2021 y pagado el día 19 de mayo de 2021 en CUALQUIER PUNTO SURED UBICADO EN BOGOTÁ D.C., decisión contra la cual se interpusieron los recursos de ley; observándose que en anterior oportunidad se le había respondido un derecho de petición y ante ello la accionada ya le informó que los componentes entregados a su hogar tienen una vigencia de SEIS (06) meses cada uno y se encuentran destinados a satisfacer las necesidades por DOCE (12) meses de acuerdo con la carencia presentada, conforme a los argumentos técnicos y jurídicos descritos en el acto administrativo. Aunado a lo anterior, frente a su solicitud sobre una fecha cierta para la entrega de la ayuda humanitaria, le informaron que al accionado y los demás integrantes de su hogar, YA FUERON SUJETOS DEL PROCESO DE MEDICIÓN DE CARENCIAS EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE, por lo cual, en cuanto se venza el termino establecido, serán sujetos nuevamente de dicho proceso de medición de carencia\_\_es decir que ya existe un pronunciamiento de fondo sobre la situación del accionante, no pudiendo pretender que a través de otro derecho de petición pretender lo mismo, pues ya está agotado el trámite necesario para acudir a otras vías judiciales.

Téngase en cuenta que la vulneración del derecho de petición se presenta por la negativa del accionado en emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable, y por no comunicar la respectiva decisión al petente, situación que, en el presente, aunque la respuesta lo fue de manera tardía fue cumplida. La respuesta de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición.

Ahora bien, en relación con la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y mínimo vital, debe decirse que teniendo en cuenta que la solicitud principal del accionante es que se le dé respuesta efectiva a su derecho de petición, situación que de acuerdo a las pruebas allegadas fue resuelta.

De tal suerte que, con las pruebas recaudadas en la presente acción, se puede observar con meridiana claridad que la entidad tutelada, dio respuesta de fondo, de forma y en oportunidad, luego la acción de tutela habrá de denegarse.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,

### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Negar la acción de tutela al derecho fundamental de petición de EIDER ELIECER PINTO RODRIGUEZ, por las razones expuestas en esta providencia.

**SEGUNDO:** Notifíquese esta providencia a todos los interesados en la forma prevista en los artículos 30 del Decreto 2591 y 5 del Decreto 306 de 1992.

**TERCERO:** Contra este fallo procede la IMPUGNACIÓN presentada dentro de los tres días siguientes a su notificación.

**CUARTO:** Si no fuere impugnada, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, como lo ordena el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

**QUINTO:** Excluida de revisión, previas las anotaciones de rigor, archívense las diligencias.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ**

**JUEZ**

*JUZGADO NOVENO DE FAMILIA, BOGOTÁ D.C.*

*NOTIFICACIÓN POR ESTADO*

SECRETARÍA

Bogotá D.C., ---14 de septiembre de 2021

El auto anterior queda notificado a las partes por anotación en el ESTADO N° 130

MARIA ELSY RIVERA USECHE

Secretario